

Febrero negro: 34 muertos y 200 heridos



Carlos Mesa comparó a los movimientos sociales, como si estos fueran unas organizaciones del lumpen o de los delincuentes.



Sánchez Berzaín, Mesa y Goni dirigen el "cuarto de guerra"

Desde comienzo del 2003, el pueblo boliviano percibía que la crisis económica y social provocada por el neoliberalismo no se recuperaría, mas al contrario empeoraría. No se equivocó. El domingo 9 de febrero de ese año, Gonzalo Sánchez de Lozada anunció públicamente que todos los trabajadores y empleados serían obligados, mediante la Ley del Presupuesto de la Nación, a pagar el 12.5% de sus salarios como impuesto directo.

Goni dijo en su mensaje que "Bolivia va por un camino seguro a la quiebra y el colapso económico" y que la vía para salvar esta crisis era el impuesto al salario y, de mal a peor, no aumentar los sueldos ni salarios. Advirtió a los trabajadores con no "apelar a medidas de presión" porque "no es posible ceder más allá de lo que está dicho aquí".

El lunes 10 de febrero, el proyecto de la ley del "impuestazo" fue remitido al presidente nato del Congreso Nacional y Vicepresidente Carlos Mesa para su aprobación con la instrucción de no modificar nada de las determinaciones del texto, porque además contaban con la bendición del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI podía presumir que el Gobierno de Bolivia le pertenecía más que a los bolivianos, porque mediante la sumisión de Sánchez de Lozada y Mesa Gisbert podía aplicar sin contratiempos sus políticas económicas destinadas a obtener la mayor cantidad posible de riqueza a costa del empobrecimiento del pueblo. En esta oportunidad,

había "recomendado" a Goni aplicar con dureza y firmeza el impuesto a los salarios para enfrentar el déficit fiscal que arrastraba desde hace años; si así lo hacía, obtendría un nuevo préstamo.

La noche del martes 11 de febrero, la decisión del gobierno de imponer el "impuestazo", si o si, provocó que los regimientos de la Policía se amotinaron en el cuartel policial cerca de la plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno. Las organizaciones sindicales y sociales del pueblo decidieron apoyar a los amotinados.

Por otro lado, el Estado Mayor del Pueblo, integrado por sindicatos y centrales de obreros, campesinos, cocaleros, estudiantes y clases medias, y la Coordinadora de la Defensa por el Agua y la Vida extendían entre sus bases la consigna de oponerse a la nueva agresión del neoliberalismo. La cúpula de la COB no daba señales ni instrucciones para sumarse a la lucha contra el "impuestazo", varios de sus componentes provenían de los partidos políticos co-gobernantes, por tanto leales a las políticas anti-laborales y proclives a seguir recibiendo "favores y apoyos" económicos de los "gastos reservados" a cambio de desmovilizar las protestas sociales.

Goni y Mesa caían en picada en las encuestas de aceptación, ya antes estaban por debajo de la línea roja, el primero con 24% y el segundo con 29%, por someter al pueblo a la extrema pobreza y hambre, y al "impuestazo". Perderían total credibilidad con los 34 muertos y más de 200 heridos de los días 12 y 13 de Febrero.

Palo al pueblo y premio a los corruptos

Las políticas neoliberales aplicadas con sangre y fuego formada por la cadena de presidentes -Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer Suárez, Tuto Quiroga y Mesa Gisbert- consistió en "achicar el Estado" para facilitar la privatización de las empresas estatales, la venta de los recursos naturales, la reducción paulatina de los servicios de salud, educación, vivienda, aumento de impuestos, despidos masivos, anulación de los derechos sociales, congelamiento de salarios y eliminación de las organizaciones sindicales, entre otras consecuencias, todo para dejar en la miseria al pueblo y seguir enriqueciendo a los ricos.

Para contener que los pobres se levanten con el puño en alto contra este "achicamiento estatal", el gobierno de Goni, al igual que sus antecesores, contaba con 20 millones de gastos reservados para tareas de represión, control y vigilancia política y compra de conciencias, pero no le resultaba suficiente para ahogar la rebelión creciente de los movimientos sociales y por eso exigió en la Ley del Presupuesto del Impuestazo, otros 20 millones. En total, 40 millones de dólares.

La otra característica de la Ley de impuestazo, en manos de Mesa como Presidente del Congreso es que daba palo al pueblo y otorgaba premio a las empresas transnacionales con la rebaja del Impuesto a las Transacciones del 3% al 2.5%.

Mientras los gobernantes predicaban la necesidad de "achicar" el Estado y la reducción de la burocracia, por otro lado actuaban contrariamente. La burocracia de la administración pública crecía silenciosamente y bajo la manga de compra y venta de pegas. El gasto público en las planillas de empleados había aumentado en los últimos cinco años de Bs. 3.300 millones a Bs. 5.200 millones, y los gastos reservados en la misma proporción.

La "alternancia democrática del poder" no era más que la captura del gobierno por los partidos neoliberales mediante turnos y de manera concertada. Como era el turno de la alianza MNR-MIR, los operadores políticos Carlos Sánchez Berzaín y Oscar Eid Franco administraban esta "alternancia" en las pegas mediante "avales" sujetos a precios de un mercado oculto.

El ex ministro y yerno de Goni, Mauricio Balcázar denunció el año pasado que Carlos Mesa entró en esa lógica mercantil de la "alternancia", porque pidió 1.5 millones de dólares a cambio de aceptar su candidatura a la Vicepresidencia.

Así, mientras exigían sacrificios económicos y sociales a los pobres, como aceptar dócilmente el impuestazo y el achicamiento de sus ingresos, los neoliberales en el poder nunca renunciaron a los festines con la plata generada por la privatización de las empresas estatales y el remate de los recursos naturales.

Los privilegios danzan sobre las espaldas del pueblo

La Ley del Presupuesto estaba en poder de la decisión de los congresistas, la mayoría leal a sus partidos cogobernantes, el MNR de Sánchez de Lozada, MIR de Paz Zamora, UCS de Jhonny Fernández y el NFR de Manfred Reyes Villa. El “impuestazo” estaba asegurado, pero manteniendo sus privilegios parlamentarios sin ninguna austeridad.

La presidenta del Senado Mirtha Quevedo (co-autora de la “masacre de Amayapampa”, hoy prófuga) dijo que ambas cámaras estaban dispuestas a revisar sus presupuestos pero no sus dietas.

En cambio, el diputado Evo Morales, consecuente con la justicia social que predicaba, exigía que la dieta parlamentaria de 42.600 bolivianos y los sueldos de ministros de 40.000 bolivianos sean disminuidos en un 50%.

El pueblo se preguntaba -los medios de comunicación no lo hacían- ¿por qué los parlamentarios no querían perder sus privilegios? La respuesta era indignante. Los congresistas no tenían pudor frente a la pobreza, ganaban mensualmente un promedio de 42.600 bolivianos, desglosados así:

- 20.900 bolivianos por dieta mensual
- 4.500 bolivianos por bono mensual

- 17.000 bolivianos gastos de representación
- Tres pasajes en avión y viáticos diarios
- 510 litros de gasolina mensual
- Seguro y atención médica especiales

Los senadores y diputados suplentes gozaban de los mismos privilegios “sin hacer nada”.

La diferencia entre los lujos y privilegios de los parlamentarios elegidos exclusivamente para votar leyes en contra del pueblo y la miseria de los trabajadores, no solamente era abismal sino cruel y despiadado.

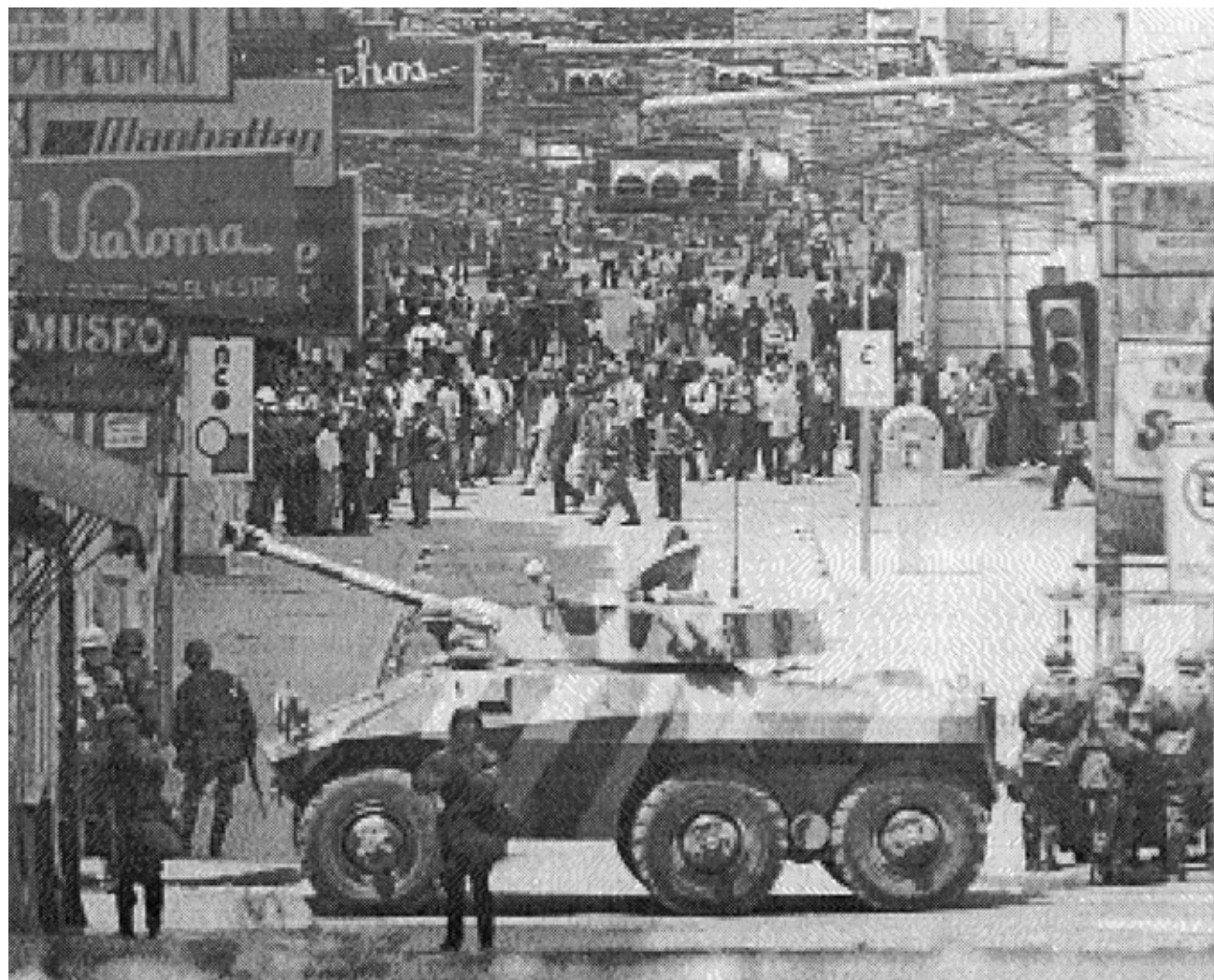
El denominado “impuestazo”, palabra que no era del agrado de Mesa Gisbert porque creía que era más bien una medida “modesta”, reducía de manera progresiva el mísero salario de los trabajadores. En el 2003, el salario mínimo alcanzaba a 440 bolivianos y si se aplicaba el impuesto del 12.5% se reducía a 385 bolivianos. 55 bolivianos constituía el impuestazo.

El cuadro comparativo de la página cuatro nos muestra claramente la diferencia entre lo que los trabajadores debían pagar con el “impuestazo” de Goni con lo que hoy, en el Gobierno de Evo Morales no se paga.

En cambio el salario mínimo nacional en el gobierno de Evo Morales es de Bs. 2060 que no está sujeto a ningún pago de impuesto por debajo de cuatro salarios mínimos, que da la suma de Bs. 8.240, tampoco paga ningún descuento impositivo, mejorando así el poder adquisitivo del salario.



Policías socorriendo a un herido de bala



Goni sacó al Ejército y los tanques de guerra, como en las dictaduras

El reinado del Fondo Monetario Internacional en Bolivia

El neoliberalismo, después de 18 años de vigencia de 1985 a 2003, estaba dando sus últimos aleteos en Bolivia. Campeaba la crisis económica, política y moral del Estado llevado al extremo por los dúos gobernantes de turno comenzando por Paz Estenssoro-Garret Ayllón, Paz Zamora-Ossio Sanjinés, Sánchez de Lozada-Cárdenas Conde, Banzer Suárez-Tuto Quiroga y terminando por Goni-Mesa Gisbert.

Los esfuerzos de estos gobiernos neoliberales estaban empeñados en seguir las recetas económicas del FMI, sin

renunciar al uso de la represión militar y policial, resumida en la entrega total de las riquezas de Bolivia a las potencias extranjeras en particular EEUU, recurriendo a constantes Estados de Sitio.

Sánchez de Lozada y Carlos Mesa eran y siguen siendo firmes defensores de los intereses políticos y económicos del imperio estadounidense, por encima de los intereses de los bolivianos. El FMI, imponía recetas para resolver la crisis económicas, en el caso boliviano, determinó que Goni resolviera el déficit fiscal con el impuesto directo a los salarios, disminuir el gasto público en salud, educación, viviendas, carreteras y otros programas sociales, y no tocar intereses de las empresas transnacionales estadounidenses y mucho menos cobrarles impuestos.

Si bien otorgaba préstamos a los países pobres, el FMI se aseguraba de que sean devueltos con altos intereses más

allá de la usura o el anatocismo (pago de intereses sobre intereses), de modo que la deuda resulte impagable, pero cobrable en riquezas de los países pobres.

El FMI envió una misión a La Paz para “supervisar” que sus exigencias sean cumplidas por el gobierno boliviano, la principal de ellas el impuesto a los salarios. Los integrantes de esa tarea se hospedaron en un hotel lujoso cerca de la plaza Murillo. No tenían restricciones para acceder a la documentación clasificada de la economía boliviana, ni había puerta cerrada en los ministerios de economía, del Banco Central de Bolivia ni del Palacio.

El jueves 13 de febrero de 2003, el segundo día de la matanza, los agentes del FMI vieron desde las ventanas del hotel cómo la gente movilizada en torno a la plaza Murillo caían por los disparos de armas de fuego de los militares que defendían a Goni. Espantados por la proximidad de los hechos y el temor de que fueran identificados por el pueblo movilizad, salieron escoltado rumbo al aeropuerto.

Aún con el saldo de las víctimas de Febrero negro, el FMI no renunció a su reinado en Bolivia solo se acabaría con la llegada del Gobierno de la Revolución Cultural y Democrática.

El oscuro “war room” desde donde decidían la suerte del pueblo

War room o cuarto de guerra es el lugar en donde políticos y militares de EEUU deciden el destino de los países más pobres. De aquí salen los planes del dominio imperial y su cumplimiento por los gobiernos títeres.

Goni tenía su propio “war room” en donde sus estrategias determinaban acciones políticas y económicas para seguir con las líneas del FMI o del gobierno estadounidense que debía cumplirse en Bolivia.

Antes del anuncio del impuestazo, Sánchez de Lozada reunió a sus estrategias y colaboradores para analizar el cómo aprobar la Ley del Presupuesto de la Nación con el menor impacto político y social posibles, considerando que la popularidad de Goni y Mesa estaban por debajo de la línea roja y era constantes las manifestaciones de descontento popular.

Los más notorios del cuarto de guerra eran el indeciso Carlos Mesa, el desalmado Carlos Sánchez Berzaín, el manipulador

de los medios de comunicación Mauricio Balcázar, los ministros de Defensa Freddy Teodovich, Alberto Gasser de Gobierno y los asesores extranjeros.

La decisión que debían tomar era no solamente dictar el “impuestazo” sino cómo sostener la medida en medio del descontento y rechazo de los movimientos sociales que habían anticipado “desobediencia civil”.

Los técnicos de economía plantearon dos fórmulas para ejecutar el impuesto al salario. Primero, aumentar los

impuestos a las petroleras transnacionales por 160 millones de dólares. Segundo, aplicar el impuesto al salario del 12.5% para recaudar 80 millones de dólares. Un ministro que participó en reuniones en Washington, le dijo a Goni que a los gringos les parecería “una locura” molestar a las petroleras que reaccionarían de inmediato con la elevación de precios? y, además, sentaría un mal ejemplo entre los inversionistas.

Como era natural, Goni, y su war room optaron por golpear al pueblo con el impuesto al salario y dejar en paz a las petroleras transnacionales.

Con la seguridad de que todo marcharía según los cálculos del FMI y el plan de ejecución en territorio boliviano, Sánchez de Lozada lanzó el mensaje el domingo 9 de febrero con el impuesto al salario, la imposibilidad de aumentar salarios y sueldos en el curso del año, no tocar a las petroleras y disminuir un punto de 3.5% a 2.5% del Impuesto a las Transacciones a favor de las empresas privadas del pueblo. Ya vendría enseguida la firme respuesta a las medidas de los gobernantes.



El levantamiento popular hizo temblar a los neoliberales

La tarde del martes 11 de febrero de 2003, los policías anti-motines se amotinaron en La Paz en el centro del poder político de Bolivia: la plaza Murillo. Se sumaron las unidades de bomberos, tránsito, investigaciones, patrulleros, administrativos y hasta los comandos especiales anti-terroristas. Exigían aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo y rechazaban el impuestazo.

El “impuestazo” fue derrotado por el pueblo movilizado

Ante la situación social insostenible y antes de perder el control del poder político, Goni fue persuadido de dejar sin efecto el cobro de impuestazo a los salarios, porque además las fuerzas represivas estaban debilitándose rápidamente ante la descomunal fuerza popular que crecía cada hora.

En su casa, un equipo de la televisión grabó el mensaje de Goni para difundir de inmediato y desmovilizar tanto al motín de los policías como a las organizaciones sociales. Derrotado y mintiendo, dijo que “se ha restablecido la calma y la paz en todo el territorio nacional”, cuando por la noche y al día siguiente continuaba la resistencia popular.

Miércoles 12 de febrero de 2003. La causa se hizo común. Policías activos, jubilados, civiles, trabajadores y estudiantes del Colegio Ayacucho ocuparon la plaza Murillo en medio de cánticos y gritos de censura al gobierno por tamaña agresión. En respuesta, el gobierno declaró en alerta a todos los regimiento militares de las tres fuerzas: Ejército, Naval y Aérea.

Un estudiante de colegio Ayacucho lanzó la primera piedra contra las ventanas del Palacio. Decenas le siguieron. Los guardias militares dispararon gases lacrimógenos para dispersarlos. Los policías amotinados dispararon también. La intensa humareda formada por los gases y las improvisadas fogatas. De pronto, grupos armados cruzaron disparos desde el techo del cuartel policial y la terraza del Palacio. Las primeras víctimas cayeron “como muñecos de trapo” y en medio de charcos de sangre.

Adentro del Palacio, Goni, Mesa y otros ministros fueron conducidos en medio de los efectos del gas, al dormitorio presidencial. Los guardaespaldas nerviosos intentaban cubrir con cinta adhesiva los umbrales de puertas y ventanas. El penetrante gas, los disparos y griterío callejero infundían miedo. Nadie sabía qué hacer. El terror se iba apoderando de los jefes cuando escucharon gritar los nombres de un capitán y un soldado muerto a tiros sobre la terraza, cuando intentaban emplear sus armas de fuego.

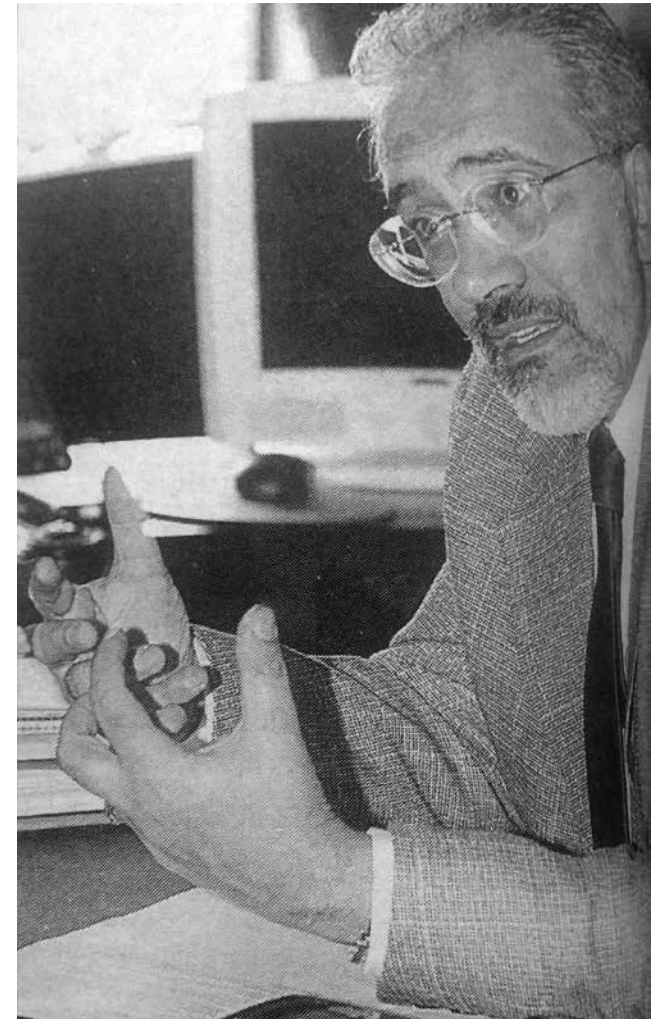
Goni pidió a su yerno que le comunicara urgente con Washington. Alguien respondió y a quien pidió el envío de 120 millones de dólares para afrontar los efectos del impuestazo. La respuesta que recibió casi lo fulmina de ira, solo pueden enviar 15 millones de dólares. ¡No alcababa ni para comprar sus carísimos puchos! Los gringos se burlaron de su gringo.

El panorama violento era tal que a más de uno le trasladó en el tiempo, al 21 de julio de 1946 la fatídica fecha en que una turba organizada por la extrema derecha y oligárquica entró al Palacio, asesinó al presidente Gualberto Villarroel y lo colgó en un poste de farol de la plaza Murillo. ¿Goni o Mesa se imaginaban morir así? No, no estaban dispuestos y por ello desataron una furiosa represión contra el Pueblo ¿Morir como mártires del pueblo al que pretendían sacrificarlo? El “impuestazo” provocó un estallido social y político que anunciaba la futura derrota del neoliberalismo.

Añadió que “no ha sido necesario que haya esas víctimas y esas muertes”, cuando en verdad estaba los efectos fatales del “impuestazo” tal como le habían advertido en el “cuarto de guerra” y él prefirió llevar adelante la medida económica más brutal de su segundo gobierno. Para terminar, con otra gran mentira, instó a los bolivianos a jurar que “no vamos a permitir que nunca más haya muerte”, y hubo más muertos y heridos en Febrero negro, y muchos más en octubre de ese mismo año.

Tratando de encubrir el crimen del neoliberalismo, Mesa Gisbert escribió que el levantamiento popular era delictivo, cometido por “grupos organizados, disfrazados de lumpen y mezclados con lumpen”.

El jueves 13 de febrero de 2003, continuó el levantamiento. Esta vez, Goni sacó al ejército y tanques de guerra a las calles para aplacar la ira del pueblo contra la política de hambre del gobierno; ya no pedían el cese del impuesto sino que se vaya Goni del gobierno, que renuncie.



Los hospitales no daban abasto para socorrer a los tantos heridos. El Banco de Sangre ya no disponía ni de una gota más. 16 muertos y más de 80 heridos fueron contados el primer día de represión.

La furia popular se estrelló contra los partidos políticos quemando las sedes del MNR, MIR, UCS y ADN y las oficinas del Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia.

No fue un acto planificado sino fue producto de una reacción espontánea contra estas organizaciones políticas que durante los años del neoliberalismo, no se habían compadecido de la pobreza por la que vivían millones de bolivianos y sin un plan de gobierno que mejorara su situación en el futuro.

La misión del FMI que todavía se encontraba en el hotel de cinco estrellas, muy cerca del Palacio, fue testigo del violento rechazo del pueblo boliviano a sus recetas anti-populares. Francotiradores apostados en esquinas y edificios disparaban contra todo lo que les parecía sospechoso. Así murió un albañil dentro de un edificio en refacción, la enfermera que intentaba auxiliarlo y herida la médica que dirigía el socorro. Los personeros del FMI fueron testigos de la masacre que provocó sus medidas económicas. Impulsados por el miedo a ser descubiertos, dejaron a tropel el hotel para volar a EEUU.

Mientras el Estado Mayor del Pueblo y la Coordinadora de la Defensa por el Agua y la Vida estaban junto a los movimientos sociales, la cúpula de la COB de ese entonces no participó en la lucha contra el impuestazo, eso sí su principal dirigente Saturnino Mallku fue sorprendido celebrando su cumpleaños el 25 de febrero con el ministro de Trabajo Juan Subirana, en una clara muestra de su traición a los trabajadores.



La OEA avaló la masacre de bolivianos en febrero negro

El gobierno tejió la hipótesis de que el motín policial, y las movilizaciones sociales estaban orientados a eliminar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese entendido el Goni invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que hiciera una investigación con el objetivo de establecer responsabilidades penales por los sucesos de febrero.

La OEA era ya un viejo aliado de Goni. En 1997, el organismo regional pro imperialista envió una comisión investigadora de la “masacre de Amayapampa”, su informe liberó de culpas al gobierno de Sánchez de Lozada y Cárdenas Conde. Ahora, en su informe de “Febrero negro” reforzaba la idea del magnicidio: mencionando que “la vida del Primer Mandatario estuvo amenazada” y señala que “hay una enorme

responsabilidad de todos los actores de la sociedad boliviana, sin distinciones de raza, género o clase social”, es decir el gobierno Goni-Mesa no tenía ninguna responsabilidad en los hechos sangrientos.

Con el pasar de los años la OEA no ha cambiado, es la misma que en el pasado consintió el bloqueo a la revolución de Cuba (1959) y es la misma que ahora alienta el golpe de Estado al presidente Maduro y la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela.

No es de extrañar entonces que los criminales de febrero recurran hoy a la OEA -su vieja aliada y cómplice- invocando descaradamente a la “democracia” y la “libertad”, principios que ellos mismos pisotearon y mancillaron en 2003.

Las frases hechas como “Dios sabe que no”, “tenemos que hacer un juramento”, “nunca más muertes” y “días de paz y trabajo”, se llevaron el viento. En octubre negro, se repetirá la historia sangrienta.

IMPUESTAZO AL SALARIO MINÍMO 2003

2003		2018	
Salario Mínimo Nacional en el Gobierno de Goni	Impuesto con el 12,5%	Salario Mínimo Nacional en el Gobierno de Evo	Salario Actual Sin Impuestos
Un Salario 440	55	2.060	No Paga
Dos Salarios 880	110	4.120	No Paga
Tres Salarios 1320	165	6.180	No Paga
Cuatro Salarios 1760	220	8.240	No Paga
Cinco Salarios 2200	385		
Diez Salarios 4400	550		
Quince Salarios 6600	825		
Veinte Salarios 8800	1100		

Con el Gobierno del Presidente Evo Morales NO SE PAGA IMPUESTOS AL SALARIO MINÍMO

Impuestazo al Salario Mínimo POR ESO EL PUEBLO SE ALZO

Fuentes consultadas:

- 1.- Jim Shultz, Lecciones de sangre y fuego: el Fondo Monetario Internacional y el Febrero Negro boliviano. http://democracyctr.org/de_old/wp-content/uploads/2011/10/desafiando_5.pdf
- 2.- Hemeroteca de la Vicepresidencia
- 3.- OEA, Informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los hechos de febrero del 2003 en Bolivia.
- 4.- Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de febrero, Biblioteca Laboral No.17
- 5.- ANF, Cronología de las jornadas de febrero negro. <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/cronologia-de-las-jornadas-de-febrero-negro-235336>
- 6.- Carlos D Mesa Gisbert, 12 de Febrero de 2003. Diez años después, mi testimonio. <https://carlosdmesa.com/2013/02/12/12-de-febrero-de-2003-diez-anos-despues-mi-testimonio/>
- 7.- Manifiesto, Estado Mayor del Pueblo Boliviano, Central Obrera Departamental – Cochabamba-Bolivia. <https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/imf/bolivia/txt/2003/0122manifiesto.htm>
- 8.- Consulado de Bolivia, Sánchez Berzaín en 2003: “Alcalde, si hay 5 ó 50 muertos no importa, vamos a resolver esto”. <https://www.consuladodebolivia.com.ar/2018/02/24/sanchez-berzain-2003-alcalde-5-50-muertos-no-importa-resolver/>
- 9.- Especial de Cambio, El Impuestazo https://issuu.com/cambio2020/docs/especial_impuestazo_19-02-15

Así mataron a las víctimas de la masacre del “impuestazo”

“Chau mamita”

El subteniente de policía (23 años) Omar Nemer salió de su casa rumbo al apoyo de sus camaradas amotinados en la plaza Murillo. Se despidió de su abnegada madre con un beso y un “chau mamita”.

Un disparo sorpresivo acabó con la vida del joven oficial. Un proyectil atravesó su pecho y destruyó sus pulmones. En el hospital, vanos fueron los intentos por salvar su vida.

Lo mato una bala dumdum

Huáscar Sánchez murió en la plenitud de su juventud (16 años). Una bala dumdum, de esas que explotan dentro del cuerpo, penetra por su pecho. Él iba por la calle comercio hacia el puesto de venta callejera de sus padres, quizá preocupado por los violentos acontecimientos. Sus familiares sospechaban que el disparo provino desde algún lugar del Palacio.

Mataron un noble sueño

Tito Intipampa estudioso y futbolista soñaba con ingresar a la Normal de Warisata, para ser profesor del magisterio. Una bala lo hirió cuando observaba cómo una empresa transnacional intentaba alejar a la gente por medio de disparos. Fue socorrido por un conductor y el camino hacia el hospital fue atacado, pero logró llegar al socorro médico pero murió.

Encapuchados dispararon a matar

Fidel “Quique” López (16 años) apoyaba a su familia a rentar bicicletas en El Alto. Allí también resistían el impuestazo. Pero Quique acompañaba a su madre y al correr en medio de la multitud, que huía de disparos, cayó muerto. Las personas que lo socorrieron dijeron que hombre encapuchados dispararon y le dieron en cabeza.

Cuatro heridas y 28 operaciones

El policía Rodrigo Patiño (21 años) contó que un grupo de militares dispararon en la plaza Murillo y él recibió cinco impactos, mientras que otros tres de sus camaradas murieron en el lugar. Fue sometido a operaciones quirúrgicas 28 veces y quedó lisiado para siempre. La promesa del gobierno de cooperar en su recuperación, nunca se cumplió.

Síguenos en La Biblioteca Laboral

LA BIBLIOTECA LABORAL

Sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria y viceversa
LENIN

